

Hoy, en un nuevo aniversario de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, en la que los Estados luego del horror de las guerras reconocen en papel la sustancialidad de derechos que nos son inalienables, e insoslayables para todos, sin excepciones, para regocijo de todos aquellos que pretendemos vivir, en sociedades construidas con un sentido de justicia.

En este marco cabe preguntarse: ¿qué valor le otorga nuestro Estado, a los principios que se compromete a defender, cada vez que firma una declaración?

Ha sido necesaria una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana para que el Uruguay se viera comprometido a dar respuestas.

Como resultado de esto el Parlamento omiso hasta entonces, el 27 de octubre pasado aprobó una ley con la que el Estado finalmente recuperó su pretensión punitiva terminando con la más infame de las leyes, piedra angular de la impunidad, que fue la ley de caducidad.

Las nuevas y viejas generaciones se han interrelacionado en una naturalizada cultura de impunidad, instalada y fortalecida a través del discurso político dominante justificado en la necesidad de "*mirar hacia delante*" o "*dar vuelta la pagina*" en pos de un "*nunca mas hermanos contra hermanos*", validador de la tesis de la teoría de los dos demonios, en lugar de un "*nunca mas terrorismo de Estado*". Hoy vemos como este discurso de la impunidad, resistido desde siempre por las organizaciones sociales y de derechos humanos comienza de a poco a resquebrajarse.

La dictadura cívico-militar arremetió contra todo, cometiendo infinidad de crímenes que las democracias subsiguientes no han sabido, no han querido asumir como delitos de Estado, delitos de lesa humanidad que aún como Estado continúan perpetuando.

La falta de voluntad política ha sido una constante en estos 26 años, el sistema político por acción u omisión ha sido un incondicional y sigiloso (a veces no tanto) cómplice.

No cabe duda de que ha sido y será la persistencia, el empecinamiento, el rechazo visceral al ocultamiento de las organizaciones sociales y derechos humanos el principal garante de la lucha ineludible por verdad y justicia.

Hace apenas dos meses fueron hallados los restos de quien resultara ser Julio Castro, maestro rural de 68 años, periodista, intelectual crítico y ético que desapareciera hace ya 34 años.

Todo este fue el tiempo que se lo tuvo oculto desde el día de su cobarde y deleznable asesinato.

Con su hallazgo se devela el verdadero carácter del entramado de la impunidad; primero fue seguramente una orden, luego las manos ejecutoras, y después el silencio y la pertinaz mentira.

Julio Castro fue un desaparecido hasta hoy porque hubo ejecutores, y a ellos los siguieron sus encubridores.

El ocultamiento y la tergiversación son los hechos condenables que hacen vigente a este crimen, incluso por parte de aquellos a quienes se les encomendó la tarea de la búsqueda de la verdad.

Una andanada de nuevas denuncias que evidencia a la tortura como método represivo de aplicación sistemática y generalizada, el desarchivo de las causas comprendidas en la Ley de Caducidad, las investigaciones históricas, el fortalecimiento de la secretaria de seguimiento de la Comisión para la Paz, las excavaciones en predios militares, los gestos con visos de autocrítica del Comandante en Jefe del Ejército suponen un nuevo escenario que originan expectativas las cuales no pueden mas que ser acompañadas con hechos.

Uno de los principales desafíos que tenemos por delante las organizaciones sociales es el fortalecer nuestras redes, conteniendo y acompañando a las victimas, ayudando a resquebrajar el ocultamiento y defendiendo la más amplia divulgación de la verdad como derecho y como valor.

La Verdad como indispensable para poder hablar de Justicia.

Más desafíos, es la permanencia de todos los que sostienen que "Todos somos Familiares" para darnos mutuos apoyos en las luchas futuras, no permitiéndonos el bajón ni el abatimiento.

Debemos, con firmeza analizar día a día todas las propuestas de reconciliación, punto final (velados) y peligrosos cantos de sirenas de los que nos mienten desde hace 35 años y sus nuevos amigos.

Desafíos de nuevos tiempos, nuevas generaciones que tendrán que asumir la responsabilidad de que la memoria no se nos llene de olvido. No esperaremos 200 años para los festejos.

A no engañarnos, que seamos pacientes no significa que seamos tontos y no sepamos que en nuestro país antes que 200 años para celebrar hay aún 200 desaparecidos por encontrar.

Montevideo, 10 de diciembre de 2011.